

bandera socialista



Año XLII
N° 135
Enero 2022

f pstperú Lit-ci
http://pst.pe
✉ bs.pstperuano@gmail.com

150
SOL

Periódico del Partido Socialista de los Trabajadores

DECEPCIÓN QUE
DEMANDA LA
MOVILIZACIÓN

pág. 2

EL FIN DE LA ILUSIÓN
EN EL GOBIERNO
CASTILLO

pág. 4

¿NEGOCIAR CON REPSOL
O RECUPERAR
LA PAMPILLA?

pág. 5

SINDICATO COGORNO
EXIGE ADMINISTRACIÓN
OBRERA

pág. 6-7

CASTILLO ABANDONÓ SUS PROMESAS

Conquistemos en las calles
una salida a las demandas urgentes
de la clase trabajadora y el pueblo

B.1.1.529
OMICRON

Ómicron: ¿oleada final o pandemia eterna?

pág. 12

Se consuma otra gran decepción que demanda urgente movilización

El gobierno de Pedro Castillo va de tumbo en tumbo. La designación del gabinete ministerial presidido por Aníbal Torres, no revierte el curso de abandono de las promesas de cambio para decepción de las expectativas obreras y populares, lo que lo convierte en un gobierno tradicional más, especialmente de esos que piden el voto con la mano izquierda y terminan sirviendo al poder económico. El agravante, una enorme incompetencia personal y política de Castillo que alimenta la voracidad del empresariado y los corruptos de siempre.

A comienzos de febrero, Castillo había echado por tierra el respaldo popular y enfrentaba las primeras protestas sociales contra su gobierno e incluso aprobando, so pretexto del combate a la delincuencia, un estado de emergencia con patrullaje de tropas del Ejército.

La gota que colmó el vaso fue la fallida designación de Héctor Valer, un personaje con graves denuncias de agresión a mujeres de su propia familia y promotor de la criminalización de las organizaciones indígenas, como jefe de un gabinete más patronal y más a la derecha que el anterior y otros ministros igualmente impresentables. Ello, sumado al hecho que la ex premier Mirtha Vásquez y el ministro Avelino Guillén dejaron el cargo haciendo graves denuncias de corrupción en el entorno presidencial y en el ministerio del Interior.

El gobierno se había colocado, a vista de importantes sectores sociales, en la misma vereda que aquellos que lo quisieron vacar, no solo defendiendo el modelo económico causante de la profunda desigualdad social y la ruina de la salud y la educación públicas, sino también mostrando las mismas taras como son la corrupción y el machismo.

El gabinete Torres no cierra la crisis

El gabinete Valer cayó en muy pocos días sin alcanzar siquiera a pedir la investidura del Congreso, y en su reemplazo Castillo designó como premier al ex ministro de Justicia Aníbal Torres, manteniendo



Con la designación de Aníbal Torres a la PCM, no se ha cerrado la crisis.



La designación de Héctor Valer a la PCM agravó más la crisis del gobierno Castillo, motivada por la renuncia de Mirtha Vásquez y Avelino Guillén por la corrupción institucional que carcome al gobierno.

prácticamente el mismo gabinete Valer con muy pocas excepciones. Siguen los ministros impresentables en Interior, Defensa,

Cultura, Transportes, etc. Perú Libre y hasta el ala de Vladimir Cerrón han incrementado su participación, pero en el mismo curso de

capitulación del gobierno al empresariado.

El problema no es solo el gabinete. La extrema debilidad personal y política de Castillo, exhibida descaradamente en entrevistas periodísticas, se traduce en un descontrol de su entorno directo y de sus principales aliados, y una total pérdida de iniciativa ante la presión del empresariado en todos los campos.

Nada que esperar

No hay nada que esperar del gobierno y del discurso vacío del presidente. La economía ha retomado un camino de recuperación y hasta mostrado récord

de exportaciones, pero solo para recuperar las ganancias empresariales mientras las masas trabajadoras siguen padeciendo salarios envilecidos, encarecimiento de los productos de primera necesidad, muchos no recuperan sus empleos y encima enfrentan despidos y cierres de fábricas.

Frente al crimen ecológico-social de Repsol el Estado ha mostrado, bajo la jefatura de Castillo, su esencia más subordinada a las transnacionales, negligente e incapaz en todos los campos de acción: no hubo intervención inmediata para conocer el tamaño de los derrames ni para dirigir el vuelco de todos los medios para contener el daño; tampoco para reparar las poblaciones afectadas por los derrames, ni para emprender las medidas administrativas y penales y la expulsión de Repsol del país.

En el tema de la pandemia, la población nacional sigue golpeada por la nueva oleada de contagios, con un número todavía alto de muertos por Covid 19 (200 muertos por día en promedio), sin contar el abandono que vienen sufriendo miles de pacientes de otras enfermedades por la saturación de un sistema de salud destartado que, para el gobierno, no es una prioridad por resolver.

Incluso, ante la brutal ola de delincuencia que golpea a la población, el gobierno de Castillo no solo muestra desidia, sino que además contribuye a su agravamiento. El escándalo en el sector Interior destapó un traslado masivo de policías a dependencias más cómodas mediante el

bandera socialista
Año XLII - N° 135 | Enero - 2021
Publicación mensual del Partido Socialista de los Trabajadores - PST.
Sección peruana de la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional - LITCI.

Dirección: Av. Nicolás de Piérola 672, Oficina 407, Lima

Director: Eduardo Pflucker

Redacción: Freddy Salazar | Antonio Encinas | Víctor Montes | Clarita López | Laura Sánchez | Manuel A. Fernandes
| Alex Díaz | Mauricio Meca

Corresponsales: **Arequipa:** Evaristo Checa | **Iquitos:** Renato Achata | **Pucallpa:** Suliana Talaverano

Diseño y Diagramación: Alex Díaz | **Depósito Legal:** 2004-8512

viene de la
página 2

pago de coimas. Por eso la declaración del estado de emergencia con la salida de tropas militares al patrullaje urbano, es una medida hipócrita y temeraria cuyo más inmediato impacto ha sido intimidar la movilización popular.

El gobierno también se ha mantenido completamente inútil frente a los abusos patronales contra la clase trabajadora, y con su nuevo gabinete esta situación solo podría empeorar más.

Gobierno-Congreso es una falsa disyuntiva

Las fuerzas reaccionarias buscan capitalizar la crisis del gobierno promoviendo una nueva moción de vacancia que no se detendrá en Castillo, sino que incluirá también a la vicepresidenta, buscando de esa manera capturar el gobierno bajo el control de las principales organizaciones político-criminales.

Otros sectores plantean como variante la renuncia de Castillo y la convocatoria a nuevas elecciones, o la suspensión de sus funciones como parte de un arreglo institucional, y otras variantes más.

No es posible saber

cuánto tiempo más podrá sostenerse el gobierno de Castillo, solo se sabe que él es el principal promotor de su desgaste, empezando por haber abandonado su plan de gobierno, apartado de los movimientos sociales y busca la aprobación de los sectores patronales. La salida, en ese sentido, no puede ser esta vez la defensa del gobierno de Castillo.

Tampoco cabe esperar pasivamente las salidas que se barajan por las alturas, que no son, claro está, para poner al centro la solución de los problemas nacionales ni la atención de las principales demandas populares sino la defensa del modelo económico y sus mezquinos intereses particulares.

Esta vez, las movilizaciones sociales que vienen gestándose, enfrentados no solo al gobierno sino también a las fuerzas reaccionarias del Congreso, retoman la lucha para que se vayan todos, plantean la posibilidad de una salida alternativa de los movimientos sociales, en la cual la clase obrera está llamada no solo a participar sino a jugar un rol protagónico por una verdadera salida obrera y popular.

Las prioridades mercantilistas del Congreso



Foto: Gerardo Matto/La República

Otro hecho extendió la indignación popular, especialmente juvenil, contra los partidos en el Congreso. La Ley Universitaria, Ley 30220, el instrumento que profundizó la privatización de la educación en el Perú, y la SUNEDU, el ente regulador de un sistema compuesto por universidades públicas desfinanciadas —sin la capacidad de asegurar el derecho a la educación de la población—, y universidades privadas que lucran de esa situación profundizando un elitismo que el tiempo ha

permitido comprobar.

La ley aprobada, en primera instancia por el Congreso, no busca cambiar esa situación, ni tampoco salvaguardar la autonomía universitaria ni defender los derechos de los estudiantes, busca simplemente aumentar la influencia de los dueños de universidades privadas dentro de la propia SUNEDU.

El descontento de la juventud y las movilizaciones contra la ley del Congreso, plenamente justificadas, deben ser inscritos dentro de la

lucha contra la privatización de la educación por una educación pública gratuita, de calidad y de acceso universal.

Pero aparte de ello, se evidenció las verdaderas prioridades de este Congreso: cuidar los intereses mercantilistas por encima de todo, y en eso se dan la mano los partidos más reaccionarios como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, con los partidos de “centro derecha” (Podemos y AP) y hasta la supuesta “izquierda radical” de Perú Libre.

Las direcciones y las salidas que se plantean

Son innumerables los problemas que aquejan a la clase trabajadora, mencionando algunos como los miles de despidos que se producen en plena pandemia, pliegos de reclamos sin resolver, el derecho a la huelga vulnerado por el mal uso de los puestos indispensables y su divergencia que es un trámite largo, tedioso, caro y que al final no se resuelve a favor a los trabajadores.

Ante esto urge que nuestras centrales enumbren una lucha para exigir al gobierno que solucione dichos problemas, pero ellas lejos de esto lo defienden y en los hechos lo encubren, confundiendo dos cosas:



Las centrales tienen la responsabilidad de dirigir las luchas sindicales exigiendo al gobierno que las resuelva.

uno es defenderlo contra el ataque racista que hace la derecha, el cual repudiamos, y el otro es que el go-

bierno Castillo no defiende a la clase trabajadora, más bien cede a las presiones burguesas, como por ejem-

plo el reciente caso de la contaminación que ha causado la empresa Repsol y que el Ejecutivo hasta la fecha no responde con mano dura por el inmenso daño que ha causado a nuestro ecosistema.

Si bien es cierto que las leyes que respaldan a los empresarios, como Repsol, son producto del gobierno de Alberto Fujimori, también es cierto que hay sobradas causales para las más drásticas sanciones, pero los hechos demuestran otra realidad.

Sabemos que para ganar nuestras reivindicaciones se necesita exigir las en las calles para ser escu-



Escribe Jack Reyes
Obrero del PST

chados. Así lo demuestra la historia como la heroica lucha que emprendieron nuestros antepasados, incluso algunos murieron para dejarnos derechos ganados como la jornada de 8 horas.

En ese sentido estamos convencidos que la lucha es el camino, y que las centrales tienen la responsabilidad de dirigir esta lucha de exigencia al gobierno, no para hacer pared con la derecha, si no para exigir al gobierno que cumpla sus promesas de campaña.

El fin de la ilusión en Castillo y la necesidad de volver a la lucha

Pedro Castillo parece haber ingresado a la fase final de su breve gobierno. El gabinete que ha designado en reemplazo del que encabezaba Valer y que fue repudiado por sus antecedentes de violencia familiar, es sólo un episodio en el camino de su salida que ya preparan los grupos de poder.

Castillo fue elegido con inmensa esperanza obrera y popular derrotando en las urnas a la poderosa maquinaria empresarial aupada detrás de Keiko Fujimori como garante de la continuidad de sus negocios. Pero traicionó esa esperanza y por ello hoy su gobierno se tambalea.

¿Por qué fracasó?

Se acusa a Castillo de incapaz y poco preparado. Sobre sus limitaciones hasta los llamados “progres” hacen escarnio y burla, mostrando desprecio por la gente del pueblo pobre que no sería capaz de gobernar nunca, ocultando que son precisamente los preparados hijos de la burguesía –PPK, Alan García...– los que llevaron a la ruina al país y robaron a raudales.

Castillo no fue elegido por su “preparación”. Fue elegido por su compromiso con los obreros y pobres con un programa que ofrecía “no más pobres en un país rico”. Su fracaso no es porque sea incapaz sino porque abandonó este compromiso para dedicarse a conciliar con sus enemigos cediendo al chantaje patronal.

Desde las filas castillistas se arguye como explicación que los constantes ataques de derecha no lo dejan avanzar. Pero la verdad es que no avanza porque no la enfrenta y más bien cede ante ella. Castillo solo tenía un camino para honrar sus compromisos y era apoyarse en la movilización obrera y popular para vencer los arrebatos de esa derecha y al no hacerlo se debilitó al mismo tiempo que ella vino creciendo..

Al ceder ante sus enemigos y postergar el cumplimiento de sus promesas, Castillo permitió que todo continuara igual, es decir que las mayorías siguieran sufriendo la catástrofe de la pandemia mientras los grandes empresarios, orondamente, realizan grandes negocios, al mismo tiempo que vulneran más los derechos obreros en los lugares de trabajo. Esto explica por qué el apoyo a Castillo en las bases obreras y populares fuera decayendo, hasta el momento de producirse la actual crisis.

En todo esto obra como agravante la responsabilidad del mismo Castillo por su improvisación y la estela de sospechas que levanta por conductas dudosas. Pero en esto el problema

de fondo es la izquierda que lo acompaña y que no ha sido capaz de organizar una administración eficiente. Perú Libre y Juntos por el Perú (JP) hicieron un pacto para gobernar, pero en todo este tiempo solo se enfrascaron en disputas por ministerios y otros cargos contribuyendo al caos en la gestión de gobierno y la reaparición de la corrupción. En estas condiciones estalla el gabinete de Mirtha Vásquez y se da pie a la torpe elección de Héctor Valer en su reemplazo, elección que obliga a toda esa izquierda a pasar a la oposición –muchos gritando “traición”–, lo que suena cínico porque ellos son tan responsables de la crisis como el propio Castillo.

El verdadero responsable de todo el fracaso es esa “izquierda” que fue elegida para gobernar. De ellos es la política de postergar las promesas electorales para transar con la burguesía. Así, los ministros de “izquierda” no hicieron nada para cumplir las promesas de la campaña: en el ministerio de Trabajo todo ha seguido mal para los trabajadores y sus reclamos, y el ministro de Economía Pedro Francke (de JP) fue el que garantizó en este tiempo la continuidad de las políticas neoliberales que benefician a los grandes empresarios y golpean a las mayorías pobres.

Esta política proyectada hacia la clase obrera la aplicó la dirigencia de la CGTP, que también en este tiempo se dedicó a no hacer nada para no molestar a la patronal con quien el Gobierno se encontraba empeñado en “concertar”.

¿Qué hacer?

Ante esto la esperanza que queda en algunos sectores es que Castillo se dé cuenta y cambie de rumbo. Pero la conformación de su nuevo gabinete tirado a la derecha muestra que es casi imposible. Aun así, en su naufragio la burguesía no le dará la mano y no parará hasta acabar con él. Sus voceros discuten libremente y con apoyo de amplios sectores medios la mejor manera de hacerlo.

Los trabajadores no deben apoyar ninguno de estos planes, como ningún plan de vacancia del Congreso que no nos representa. Cualquier cambio urdido desde ese antro o desde las oficinas de la CONFIEP solo puede ser peor para los trabajadores.

Ante esta situación la clase obrera están ante el inmenso desafío de construir una salida junto a las mayorías pobres. Si ya no es posible esperar que el gobierno de Castillo cumpla sus promesas y que vendrán más ataques de la burguesía, es la hora de retomar la movilización y la lucha para la conquista de las reivindicaciones.

Muchos esperaron que votando por Castillo las soluciones llegarían solas, pero la experiencia muestra que la realidad es más compleja. La única garantía de defender y ganar derechos es luchando: esto lo sabe todo dirigente de base. Y la mayor demostración de esto es que en este breve periodo, la dirección de la CGTP al haber renunciado a la lucha para apoyar al gobierno, solo se ha favorecido a su fracaso y al empoderamiento de la reacción burguesa.

Ahora la vanguardia obrera necesita desperdiciarse para retomar las calles como centro de su actividad y esperanzas. Los trabajadores forjan su destino luchando, jamás en el juego parlamentario ni en las promesas electorales. Hay que tomar nota que en el debate que copan los medios no existen los despidos y la desocupación sino solo los intereses de los grandes empresarios y en esa línea hasta los costos de la crisis actual serán descargados sobre las mayorías pobres como siempre ha sido.

Se necesita discutir y aclarar esta situación en las bases y organizarlas para pelear constituyendo comités de lucha, coordinando con otras bases e impulsando un **Paro Nacional**. Quedarse quietos significa dejar el camino libre para que sigan avanzando las huestes reaccionarias al tiempo que sigan creciendo los problemas laborales. Hay que salir a pelear ya para exigir al gobierno de Castillo que cumpla sus promesas y demandar salario mínimo de 1,500, fin a los ceses colectivos, no al Cierre de Cogorno, fin a la tercerización, empleo masivo con un plan de obras públicas...

Hace rato que la clase trabajadora arrastra los pies debido al rol paralizante de la cúpula de la CGTP. Ahora la central se enfoca en pedidos lastimeros a Castillo en lugar de organizar la lucha. La tarea es titánica porque tiene que ir más allá del freno que representan las direcciones. No es imposible. Existen inmensas reservas en la clase obrera y el movimiento popular, y muchos elementos conscientes que son los llamados a colocarse a la cabeza de las nuevas tareas.

El **PST** que desde el primer momento llamó a no depositar confianza en Castillo y a mantener la movilización permanente, hace este llamado a la vanguardia obrera y juvenil.

Lo hace convencido de que, por este camino es posible poner coto a la derecha y conquistar lo que más nos urge, y poner en pie a la verdadera fuerza de clase y de sus organismos en la perspectiva de conquistar un Gobierno Obrero y Popular que, de verdad, refunde el país y atienda las urgentes aspiraciones de las mayorías empobrecidas.



¿Negociar con Repsol o recuperar La Pampilla?



Por Víctor Montes

¿Por qué el presidente Castillo no echa a Repsol —además de hacerle pagar el desastre ambiental y social que ha provocado— y recupera la Pampilla? ¿Qué es lo que verdaderamente hay tras el derrame de 11 900 barriles de petróleo en nuestras costas?

A pasado más de un mes, y el gobierno se ha mostrado incapaz de tomar una sola medida contundente frente al derrame de petróleo provocado por Repsol en el mar de Ventanilla y que, de momento, se ha extendido hacia el norte, llegando a las costas de Chancay.

Al mismo tiempo, el impacto del derrame es impresionante: además de la contaminación de las aguas, playas, y especies marinas de nuestro mar —hecho que constituye un verdadero ecocidio del cual tardaremos varios años en restaurar—, el derrame afecta a más de 3,000 pescadores artesanales y sus familias, quienes se encuentran imposibilitados de hacerse a la mar debido a la contaminación de las especies que suelen pescar.

¿Quién es responsable?

Desde el momento mismo del derrame, Repsol ha procurado lavarse las manos ante lo ocurrido. No solamente mal informó sobre la cantidad de barriles que se vertieron al mar —su primer reporte hablaba de 0,16 barriles derramados. Además, actuó con lentitud frente al derrame, poniendo en evidencia la falta de un plan de contingencia eficiente para hacer frente a estas emergencias.

Peor aún, de acuerdo al especialista Enrique Herrera, lo usual es que Repsol no coloque barreras de contención de crudo en el mar, en ninguno de los cuatro terminales de la refinería La Pampilla, cuando se realizan operaciones de descarga de petróleo. Las barreras de contención son parte del protocolo en este tipo de operaciones.

Más aún, Herrera declara que Repsol, accionista mayoritaria de la Pampilla, es responsable por el mantenimiento de las terminales de la refinería, incluida por supuesto, de la terminal número 2, donde



Foto diario Expreso

se ha producido el derrame, construida hace 40 años... ¿Se habrá encargado Repsol de mantener en óptimas condiciones dicha terminal? Todo indica que no.

Así se devela el verdadero rostro de la “virtuosa” inversión privada: la verdad es que no invierten nada, y además de llevarse a precio de regalo nuestros recursos —petróleo, minerales, peces...— nos dejan la contaminación, instalaciones obsoletas y miseria.

¿Qué ha hecho el gobierno?

Además de entregar víveres a algunos pescadores, y anunciar un bono de S/. 1,000 para los pescadores y trabajadores y trabajadoras del turismo afectadas por el derrame, las sanciones que hasta el momento se han impuesto a Repsol son ridículas: tres infracciones de 18 millones 400 mil soles, (55 millones de soles aproximadamente) para una empresa transnacional

que factura miles de millones de dólares, y que no asegura remediar el impacto del derrame. Más recientemente se han “detenido las operaciones” de la Pampilla, para “forzar” a Repsol a pagar dichas multas.

Sin embargo, hoy que se ha abierto la posibilidad de recuperar la Pampilla. El presidente Castillo, que durante la campaña habló de expropiaciones, y luego como presidente rebajó esta propuesta a la de la “renegociación” —por ejemplo con Pluspetrol en Camisea—, apenas ha hablado de la responsabilidad de Repsol.

Castillo cierra los ojos ante el hecho evidente de que Repsol, responsable por el derrame, debe irse de la Pampilla. Es decir, ¡la Pampilla debe volver a manos del Estado!

Asimismo, mientras el Poder Judicial dicta orden para que los gerentes de Repsol no abandonen el país, no se les ha dado orden de captura, y se encuentran libres en sus mansiones, pese al tremendo crimen que dicha empresa ha

perpetrado contra nuestro ambiente.

¿Cuál es la salida?

Por todo esto es necesario que la clase obrera ingrese, de manera organizada, a las todavía débiles movilizaciones que se han producido para exigir al gobierno que descargue sobre Repsol el costo de la remediación.

Las evidencias han hecho que dichas movilizaciones, pasen de la exigencia de que Repsol se haga cargo de lo ocurrido, a que se la eche, lo que en los hechos, debería significar recuperar la Pampilla. Sin embargo, no avanzan a demandar su expropiación, debido al corte ecologista de la mayoría de organizaciones que hacen parte de dichas acciones.

Desde el punto de vista de los intereses de clase de los trabajadores y trabajadoras del país, sí es posible hacer funcionar de manera racional y cuidadosa la refinería, al control de los trabajadores. Y para esto, es necesario recu-

perar (expropiar) la Pampilla. Solo de esta forma, además de prevenir y remediar el impacto ambiental, es posible poner esos recursos al servicio de las necesidades del país.

Pero muchas veces la idea de expropiar genera temor, pues se piensa que así se “espantará la inversión” y, por tanto, perderemos nuestros trabajos, como propagandiza la prensa patronal. Es la idea que por 30 años nos han vendido para justificar el remate a precio “huevo” de las empresas del Estado. Por eso, a diferencia de hace 30 años, resulta extraño y hasta “temible”, para mucha gente, hablar de expropiaciones. La campaña contra Castillo y su elección, durante la segunda vuelta de las últimas elecciones, volvió sobre este tema, y por eso se encuentra a flor de piel.

Otros tantos justifican la renuncia a expropiar, porque creen que le da “herramientas a la derecha” para enfrentar al gobierno. Pero el gobierno ya renunció al programa de la expropiación, y aún así la derecha sigue, implacable, fustigando a Castillo y compañía, que, adicionalmente, poco hace por salir de esa situación.

Lo que los trabajadores y trabajadoras necesitamos es movilizarnos. Es preciso parar el saqueo de nuestros recursos por parte de un puñado de empresas imperialistas, que además no le interesa para nada el cuidado del ambiente. Es clave que las direcciones obreras, como la CGTP, dejen su pasividad y convoquen a una lucha nacional por la recuperación de La Pampilla, por su expropiación sin pago, y tras ella, de todas nuestras riquezas petroleras, gasíferas y mineras, para que, bajo control de sus trabajadores, se garantice tanto el trabajo como la explotación responsable de nuestros recursos.

Este es el único camino para asegurar una explotación racional y responsable de los recursos, con remediación ambiental, y garantizando que la riqueza que extraemos de nuestro suelo sirva para atender las necesidades del propio pueblo trabajador y pobre.

¿Qué sucedió?

El 15 de enero, durante una operación de descarga de petróleo en la refinería La Pampilla, de la transnacional Repsol, se vertieron al mar 11 mil 900 barriles de petróleo.

De acuerdo con las declaraciones del capitán

del buque que realizaba la descarga, Repsol demoró alrededor de 12 horas en enviar buzos para corroborar la falla que había provocado el derrame, y la magnitud del mismo.

De otro lado, el mismo capitán denuncia que las barreras que se deben colocar

antes de iniciar la carga y descarga del petróleo, no lograban cubrir el perímetro del buque.

Del mismo modo negó que se haya presentado algún oleaje anómalo que pudiera ser causante del derrame.



FRENTE AL CIERRE DE LA EMPRESA

Sindicato de Cogorno en lucha contra el cierre y por la...

El cierre intempestivo de la patronal dejó en la calle a 176 trabajadores, los que ahora luchan y llaman a las centrales y a las bases a la unidad sindical para defender los puestos de trabajo reclamando la administración obrera de la fábrica.

El golpe sufrido por los obreros de **Cogorno** no tiene precedente en la historia reciente. Después de una larga lucha contra dos ceses colectivos a la que siguió una larga huelga por mejoras salariales, y luego la pandemia del Covid 19 que melló sensiblemente sus fuerzas, los obreros recibieron la comunicación del despido masivo motivado por el cierre y liquidación de la empresa.

Una secuela de este golpe es la enfermedad de **Ronny Mendoza**, el dirigente de esta base y reconocido por su apoyo militante a todas las luchas: el compañero cayó enfermo víctima de estrés traumático, de la que se recupera lentamente, en parte gracias a la solidaridad organizada por bases y activistas.

La pelea

Ronny se recupera a la par que se organiza la resistencia de sus compañeros en defensa del trabajo. Una mala noticia es la existencia en esta base de dos sindicatos que siguen caminos diferentes. El Sintracsa (afiliado

a la CGTP) que se ha limitado a los trámites legales, y el Sindicato Peruano –Sinpertracsa– (sin afiliación a ninguna central) que, además de los trámites, hace esfuerzos por ganar la calle convencido de que se debe pelear aun sacando fuerzas de flaqueza. El sindicato es liderado por **Percy Cárdenas** y ha realizado tres plantones (otro fue suspendido por el Estado de Emergencia) con apoyo de bases.

El mismo sindicato realiza una campaña de recolección de firmas para un pronunciamiento de apoyo a su lucha, demandando al gobierno la solución del problema y a las centrales a que encaucen la pelea junto a las reivindicaciones de los trabajadores. El pronunciamiento ha recibido cientos de firmas de dirigentes de bases y de federaciones, y de representantes de organizaciones de veinte países como la Coordinadora de Luchas y Solidaridad de Colombia. El documento fue entregado por una delegación de dirigentes a los máximos representantes de la CGTP, la Central Autónoma de

Trabajadores y Confederación Sindical del Perú, recibiendo de ellos el compromiso formal de apoyo.

Cualquier luchador obrero u obrera sabe lo que significa enfrentar el despido: quedar sin salario y no poder pagar la luz, los alimentos, la educación de los hijos; y día a día recurrirse mientras se sostiene la lucha con la esperanza de volver al trabajo. Pero en el caso de Cogorno, la lucha es mucho más difícil porque enfrentan el cierre de la empresa.

Cierre fraudulento

La Junta General de Accionistas de Cogorno reunida el 22 de noviembre resolvió la “disolución y liquidación” de la empresa y nombró una entidad liquidadora para llevarla a cabo. Es decir, en Cogorno ya no existe ninguna administración y todo su activo y pasivo pasó a manos de un tercero que iniciará el proceso de liquidación. En la misma fecha la empresa ordenó el despido de todos los traba-

jadores (176) arguyendo que la ley establece como causal de despido “justo” la liquidación o cierre de la empresa.

Por supuesto, el cierre no se ha producido de manera correcta y existen una serie de desaguizados que el Ministerio de Trabajo puso a luz. Esto llevó a la autoridad a desautorizar el despido masivo. Excelente. Pero ahora ¿a dónde vuelven los obreros si la fábrica está cerrada y no existe ni siquiera un portero a quien reportarle la ejecución de la resolución ministerial?

La lucha de los obreros y la solidaridad que gana impactó en las autoridades que han tenido que fallar a su favor entregando un punto de apoyo para continuar la lucha; porque otra sería la situación si ella favorecía a la empresa. Sin embargo, es claro que no resuelve el problema de fondo (el cierre) y por ello los obreros seguirán en la calle mientras se procesa la liquidación de las máquinas y el edificio de la empresa poniendo fin a la fuente de los empleos.

CRECE LA SOLIDARIDAD CON COGORNO



Wilfredo Llanos del Sitob, Joe Braga del Sinutransa, Ernesto Benito de Sintramol y Anderson Santa Cruz de Celima.



En la CGTP, la comisión fue integrada por Anel Montoya de la FNTTP, Francis Gama de Saga Falabella, Percy Cárdenas de Cogorno y Jack Reyes de Celima.



En la Confederación Sindical del Perú, CSP, con su secretario general Flavio Mozo.



En la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, CATP, con su secretario general Rolando Torres Prieto y otros dirigentes.

ADMINISTRACIÓN OBRERA

Los cierres de empresa

Resolver este problema no está al alcance del MTPE ni del Poder Judicial. La Constitución dice que la apertura como el cierre de empresas son actividades libres, lo que se entiende porque estamos en una sociedad capitalista. La Constitución también dice que el trabajo es un derecho, pero “de acuerdo a ley”, y la ley establece como causal de despido el “cierre de la empresa”. Desaparecida la empresa desaparece la fuente de empleo.

En arreglo con esto, en el marco de la libertad empresarial, en la pandemia cerraron miles de pequeñas empresas y hasta muchas importantes y reconocidas: las cadenas de tiendas Electra y Paris, la empresa de transportes Soyuz, Universal Textil; y dejaron a decenas de miles de trabajadores en la calle porque los cierres no tienen solución legal. Todos sabemos lo que esto significa, nuestros padres sufrieron los cierres en los años 90 que los dejaron sin empleos.

No obstante, la demanda promovida por los sindicatos dentro del marco legal vigente para que se respete los puestos de trabajo

es lo único que se puede hacer como defensa, mientras se busca una solución al problema de fondo. Algunos alientan la esperanza en que la disolución y liquidación de la empresa solo sean aparentes, que el liquidador sea una farsa y que en algún momento la empresa vuelva a operar: entonces se haría realidad la resolución que ordena la reposición. Pero, mientras tanto, hay que responder a lo que formalmente se declara y existe que es la liquidación y cierre de la empresa.

La bandera de la Administración obrera

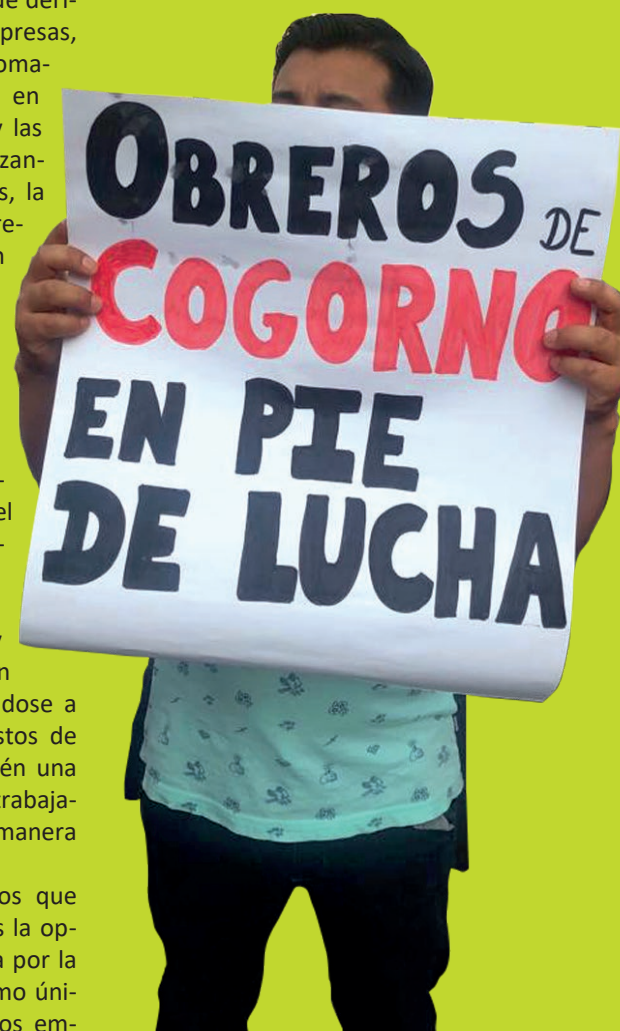
Este es un problema nuevo para la generación de obreros surgidos bajo la boyante expansión capitalista producida desde inicios del año 2000. Los cierres en los años 70, 80 y 90 fueron resistidos con luchas: de ahí llega a nuestra memoria el caso de Cromotex —donde murieron 6 obreros defendiendo su puesto de trabajo—, de la antigua ladrillera Rex que luego de una larga lucha conquistó la administración obrera de la fábrica y de la empresa de transportes estatal Enatru que también conquistó lo mismo.

La experiencia más cercana sucedió en Argentina, donde a raíz de la crisis del 2001 que derivó en cierre masivo de empresas, muchas de ellas fueron tomadas por sus trabajadores en defensa de sus empleos y las pusieron a operar garantizando el pago de sus salarios, la contratación de más obreros y hasta aportaron con los bienes que producían a la población pobre. La más emblemática de esta lucha fue la de Cerámica Zanón.

De este modo 500 fábricas fueron “recuperadas” y con la lucha y el apoyo de la clase obrera argentina se logró que el gobierno los declare de interés nacional, las expropió y entregue la administración a sus trabajadores poniéndose a salvo más de 19 mil puestos de trabajo. Así se dejó también una inmensa lección para los trabajadores del mundo sobre la manera de responder a los cierres.

Por eso ahora sabemos que ante el cierre de empresas la opción que queda es la lucha por la **administración obrera** como única manera de preservar los em-

pleos. No existe otra.



El ascenso del gobierno de Castillo produjo confianza y expectativa en la clase trabajadora que la llevó a realizar una ola de huelgas, principalmente por Pliegos de Reclamos desatendidos desde el inicio de la pandemia.

La ola chocó contra la patronal, que, desde su férrea oposición al gobierno buscando disciplinarlo a las reglas de la economía capitalista, endureció su política antiobrera, y las huelgas tuvieron que extenderse hasta más de 30 días para lograr algunas soluciones, y aun así los ataques han seguido con despidos como en Agregados Calcáreos y Mexichem.

Las normas laborales vigentes frenan las luchas

Una parte del problema que expresan las luchas empieza con la calificación abusiva de los llamados "puestos indispensables" que las empresas comunican a principios de cada año a la Autoridad de Trabajo, y que es de aprobación automática. Esta medida impide que un sector de trabajadores (en muchos casos 100% de los sindicalizados) acaten las medias de fuerzas bajo amenaza de ser despedidos, como sucede en Alicorp, Molitalia y Celima. Algunas organizaciones sindicales

La clase obrera debe luchar

asumen procesos costosos y engorrosos de divergencia, como señala la norma, pero que en la mayoría de casos no se resuelven, o cuando sucede favorecen a los empresarios.

Cuando las organizaciones sortean este problema y se van a la huelga, deben enfrentar otro problema: el **esquirolaje**, que es el reemplazo de los trabajadores en huelga por nuevos para llevarlos al desgaste, sin que la Autoridad de Trabajo haga nada para evitarlo. La resolución ministerial llega meses después de acabada la huelga, y cuando desfavorece a la empresa este la lleva a la vía judicial. Así ocurrió en las huelgas del SINATOG y el SITOB.

Como salida a tantos problemas se nos ofrece el **arbitraje potestativo**. Esta en realidad es una salida fraudulenta —además de costosa—, porque no resuelve las expectativas de aumento, y cuando no es del gusto patronal simplemente lo judicializan llevando al cansancio a los trabajadores. Ahora la misma patro-

nal utiliza este recurso para impedir que los sindicatos realicen huelgas, como sucedió en Gloria donde luego de 60 días de huelga la empresa impuso el arbitraje.

Cuando se sortean todos estos problemas y la huelga se realiza, la solución no llega porque la patronal no quiere y el Ministerio de Trabajo nada hace. De esta forma los conflictos se extienden y algunas veces ni se resuelven. Y luego de la huelga —como ya dijimos— muchas patronales vuelven a la carga aplicando despidos y otras represalias.

Suspensión perfecta y ceses colectivos más vigentes que nunca

Los problemas son mayores cuando enfrentamos los **ceses colectivos**, que desde que se inició la pandemia ha sido utilizado a diestra y siniestra por las patronales dejando a centenares de trabajadores sin empleo con la venia de las normas vigentes. Así vemos el caso de **Cogorno**, que muestra el ataque pa-

tronal al que estamos expuestos.

La salida sigue siendo la lucha de la clase trabajadora

Enfrentamos esta situación peleando cada uno por nuestro lado, desde nuestra pequeña trinchera sindical. Pero nada de esto cambiará si no unificamos las luchas.

El triunfo celebrado por los trabajadores ante la elección del presidente Castillo solo produjo ilusiones y ahora trae frustración ante el abandono de sus promesas de campaña. Por el contrario, la patronal y sus operadores políticos intensifican sus ataques. Esta situación se ve agravada porque los principales organismos de la clase obrera, con sus dirigentes a la cabeza, optaron por apoyar al gobierno, dejando a su suerte las luchas obreras y los reclamos populares.

La salida sigue siendo unificar las luchas, poner en pie un campo alternativo con independencia política ante el gobierno. Hasta aho-



Escribe Manuel Fernández
Dirigente obrero del PST

ra las luchas heroicas que ha desarrollado la clase trabajadora son ejemplos, pero deben ponerse al servicio de construir la unidad para la lucha dirigida a derrotar las normas antiobreras y a resolver los principales problemas que nos afectan como clase, como los ceses colectivos y los despidos. Esa es la tarea que tenemos los y las luchadoras más conscientes en esta etapa.

Despidos en Mexichem

Una situación parecida, de ofensiva patronal, ocurre con los obreros de **Mexichem** (tuberías PAVCO). La patronal despidió a un trabajador y denunció penalmente al secretario general del sindicato (Stompsa) por el hecho de haber ejercido su **derecho de huelga**.

En Mexichem la huelga fue declarada procedente en primera instancia y la empresa había suscrito el compromiso de que no aplicaría ninguna represalia contra los huelguistas, pero ahora ha iniciado una política de persecución y hostilizaciones contra dirigentes y afiliados al sindicato.

La Fetrimap, federación a la cual están afiliados ambos sindicatos, realizó una masiva movilización al MTPE el pasado 7 de enero en protesta contra los despidos. Ahí se constituyó una comisión de diálogo para que el MTPE resolviera el conflicto. Pero no es una garantía, por eso se requiere el más amplio apoyo y volver a las calles hasta lograr la reposición de todos.

EN COMACSA EL DERECHO A SINDICALIZACIÓN ES LETRA MUERTA:

Reposición inmediata de los despedidos

La empresa **Comacsa** comenzó el año 2022 con el despido de cuatro trabajadores sindicalizados: Raúl Gonzáles Sarzo, Fernández Sedamano, Anderson Espinoza y Maycol Cuevas; quienes acataron la heroica huelga de 37 días. El argumento utilizado es «por término del contrato», pero la realidad es que los despedidos venían laborando más de cuatro años consecutivos en la empresa.

Con esta represalia, la patronal de Comacsa incumple el acuerdo suscrito al concluir huelga, de **no**



Plantón relámpago del sindicato (Sitramac) frente a la empresa rechazando los despidos y exigiendo su reposición inmediata.

tomar medidas contra los trabajadores y dirigentes que acataron la medida. Si alguna «falta» cometieron los cuatro compañeros des-

pedidos fue haber ejercido su **derecho a la sindicalización** y su derecho a acatar la huelga que el MTPE declaró **PROCEDENTE**.



Por Alex Díaz

Con esta medida la empresa pretende disuadir que otros obreros se sindicalicen, así como quebrar la voluntad combativa de la nueva camada de activistas surgidos al calor de los 37 días de huelga victoriosa.

La actitud patronal ha provocado la justa indignación de los trabajadores quienes vuelven a las calles para exigir la **inmediata reposición** de sus compañeros despedidos.

Desde el **PST y Bandera Socialista** expresamos nuestro apoyo y solidaridad con los compañeros despedidos.

Tercera ola: Por acceso gratuito a las pruebas y medicinas



Por Mauricio Meca

La tercera ola del covid 19 no es tan grave como anunciaban los pronósticos más optimistas, pero es uno de los principales problemas que atraviesa el país y que afecta la salud y la economía de la población trabajadora y pobre.

Omicron

La letalidad de la nueva variante ha resultado menor a la de sus antecesoras mutaciones, esto sumado a la inmunidad alcanzada debido a la vacunación.

Si bien la nueva variante es menos letal y sus síntomas son leves, tiene una alta capacidad de producir más casos nuevos en menos tiempo. No por casualidad se dice que es el virus más contagioso que se conoce en la historia de la humanidad, incluso más que el sarampión.

En las últimas semanas se han reportado datos que sobrepasan la cantidad de contagios de las olas anteriores:

- 800 niños hospitalizados por covid.
- Casos positivos de menores de 12 años en diciembre fue de 2,900 y en enero superó los 41,342.
- 70 mil casos positivos en una semana, mayor pico de contagios en la pandemia.
- El Minsa reporta un incremento de decesos: 3,455 fallecidos en enero (en diciembre fue de 1,177).

¿Dónde radica el peligro?

El acceso a la salud de la población es un calvario. Miles de personas deben hacer largas colas bajo el sol y con síntomas solo para hacerse una prueba de descartar. Y muchos ni pueden acceder a ella por falta de pruebas, de personal médico o de equipos que las procesen. Como en distintas circunstancias en las que el Estado no cubre las necesidades de la salud, miles



Foto: Andina

recurren al sector privado para hacerse una prueba molecular que bordea los 200 soles y para adquirir medicamentos, que una vez más subieron de precio sin que el gobierno haga nada para impedirlo. Mientras las grandes mayorías siguen sufriendo los efectos económicos de la pandemia (pérdida de empleo, ceses colectivos, etc.), deben seguir lidiando con el virus.

Además, los expertos señalan que la forma exponencial en la que se incrementaron los contagios no solo puede ocasionar un

nuevo colapso en el sistema de salud, sino que puede causar otras variantes del virus y continuar la pandemia, que así no tendría cuando terminar.

¿Qué necesitamos?

Mientras las condiciones del sistema de salud sean precarias el número de decesos también será mayor. Si bien la cifra de fallecidos de esta ola en relación a la segunda ola sigue siendo mucho menor, el hecho es que la gente sigue muriendo por falta de camas, de personal

médico y medicinas. Esta es una responsabilidad ineludible del gobierno.

Tener acceso a una salud gratuita y de calidad sigue siendo una condición fundamental para salvar la vida de millones de peruanos con escasos recursos. Sin recibir atención temprana y gratuita, sin guardar reposo adecuado por presión de los empleadores, o por la necesidad de salir a trabajar para comer, sufriendo el alza en los costos de medicinas y hospitalización, sin volcar los recursos necesarios para financiar la emergencia, no es posible que el gobierno se autodenomine del "pueblo", como hace Castillo.

Es necesario exigir al gobierno estas demandas. Los trabajadores de Quellaveco denunciaron a la minera Anglo American de no cumplir con los protocolos de bioseguridad y le exigieron que asuma los gastos y se responsabilice por los enfermos. Este es el camino que debemos seguir.

El regreso a las clases presenciales



Por prof. María Díaz

Desde el gobierno y los colegios privados se viene impulsando que el retorno a clases se debe dar sí o sí. *"En provincias ya se está dando la presencialidad y semipresencialidad, la educación no puede parar, los colegios se deben reabrir"*, expresa Norma Correa, especialista educativa PUCP.

Según la Defensoría del pueblo, el 62% de las Instituciones Educativas Públicas se encuentran en zonas rurales. Ellas son mencionadas como ejemplo por los especialistas para el retorno a las clases presenciales. Pero lo que no dicen es de qué forma lo harán, o por qué razón.

Una maestra en la región de Amazonas menciona que, si bien están dispuestos a regresar a las aulas, todos los

maestros y estudiantes deberían tener las mejores condiciones: *"El regreso seguro tiene que ver con escuelas que tengan agua potable, los espacios adecuados, y nos damos cuenta que hay escuelas con mala infraestructura, sin agua"*. Un maestro expresa: *"Hay escuelas que tienen una matrícula muy alta, y, tratándose de niños de preescolar, que es el nivel donde yo me encuentro, ellos conviven, son niños que tienen la inercia de estar juntos, es muy diferente como en otros niveles donde podemos mantener la sana distancia y respetar estas indicaciones que se dicen. El regreso a clases tiene que ver con muchísimas otras cosas y no solamente la voluntad del docente o del padre de familia"*.

¿Hay un plan estratégico?

Para que un colegio sea calificado como apto significa que cumple tres condiciones básicas: de contexto, de bioseguridad y sociales. Solo así la institución educativa —informa el Ministro de Educación— puede volver a operar.

Las condiciones de **contexto** son aquellas que tienen que ver con los indicadores epidemiológicos de la zona donde está el colegio: tasa de mortalidad, ocupación de camas UCI, positividad al virus, etc.

Las condiciones de **bioseguridad** son aquellas que garantizan la salud de las personas que estarán en las aulas: aforo, ventilación, dis-

tanciamiento entre carpetas, baños correctamente implementados, etc.

Las condiciones **sociales**, tienen que ver con el acuerdo que realiza la institución educativa con la comunidad; acuerdo entre docentes, autoridades locales y familias.

Todos estos factores y más, condicionan el esperado retorno a clases de los maestros y estudiantes.

Sin embargo, **no hay un plan** que defina quiénes corroborarán las tres condiciones de apertura de una institución educativa, ni el presupuesto detallado, sobre las condiciones de bioseguridad, y apenas se ha mencionado la entrega de mascarillas para docentes y estudiantes.

Exigimos un retorno a clases seguro

No se puede regresar a las clases presenciales si no hay seguridad de protección de la salud del cuerpo docente y los alumnos.

Nos dicen que tenemos que regresar a clases, aun cuando las mismas autoridades nos repiten que la tercera ola de pandemia tendrá sus picos más altos en marzo. ¿Quién nos garantiza que los niños que asistan a la escuela no se contagien, o que el maestro no vaya contagiado y contagie a estos niños de la escuela donde laboramos?

Necesitamos que se garanticen todas las condiciones necesarias para el retorno a clases presenciales.

CHILE

Gabriel Boric y la Nueva Concertación: análisis y perspectivas

En los últimos días se han publicado varios artículos sobre el Gabinete del futuro presidente Gabriel Boric. En este artículo no pretendemos hacer un análisis pormenorizado de su gabinete, ya que eso puede encontrarse fácilmente en otros reportajes. Nuestro objetivo acá es discutir, en base a los elementos que ya están sobre la mesa, qué podemos esperar del futuro gobierno Boric.



Por Movimiento Internacional de Trabajadores
MIT – Chile

La Nueva Concertación

La composición del gabinete llamó la atención, en primer lugar, por la cantidad de mujeres en cargos importantes, destacando a Izkia Siches en el Ministerio del Interior y Camila Vallejos en la vocería del gobierno. En total, 14 mujeres y 10 hombres ocuparán los ministerios. Esa composición, con mayoría de mujeres, es distinta a la de todos los gobiernos anteriores, principalmente a los primeros gobiernos de la ex Concertación, conformados mayoritariamente por hombres. Esto demuestra que más mujeres están ocupando cargos de poder dentro de la institucionalidad y hasta ahora, nada más. Si bien muchas de las futuras ministras se dicen feministas y luchan por derechos como la legalización del aborto, debemos ver cuáles serán las medidas concretas que tomará el gobierno para solucionar los innumerables problemas de las mujeres en nuestro país,

en particular de las mujeres más pobres y trabajadoras.

Además de la amplia presencia de mujeres, otro elemento que llama la atención en el nuevo gabinete es la entrada de varios personajes de los partidos que condujeron el país en los últimos 30 años, los partidos de la ex Concertación. La única que queda afuera es la Democracia Cristiana.

En uno de los cargos más importantes del futuro gobierno, el Ministerio de Hacienda, estará el economista **Mario Marcel**. Mario Marcel ha asesorado a todos los gobiernos de la ex Concertación en los últimos 30 años y también ha pasado por varios bancos internacionales, como el BID y el Banco Mundial. Su rol no ha sido secundario, ya que ha tenido cargos importantes relacionados al área económica de los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet.

Luego del nombramiento de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda, quien primero salió a celebrar públicamente

el hecho fue nadie menos que Andrónico Luksic, el más rico empresario chileno, dueño de empresas tan importantes como Antofagasta Minerals, Hapag Lloyd (naviera), CCU, Banco de Chile, entre otras.

Mario Marcel es el hombre del gran capital, del sistema financiero internacional y de la burguesía chilena. Es el hombre que tendrá la tarea de garantizar que ningún interés de los grandes bancos extranjeros, fondos de inversión y de la burguesía chilena serán perjudicados en el próximo gobierno. También tendrá la tarea de mantener las cuentas públicas al día: no permitir que se gaste mucho dinero en derechos sociales, lo que podría afectar los privilegios del gran empresariado y de los acreedores de la deuda pública chilena. Así, uno de los cargos más importantes del nuevo gobierno estará en manos de un economista de confianza de la alta burguesía chilena e internacional.

El nombre de Mario Mar-

cel ya apunta lo que será el gobierno Boric. La alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista con los partidos de la ex Concertación no es solamente un “cuoteo político”. Es una alianza de dos clases sociales.

El Frente Amplio y el Partido Comunista son representantes de los sectores medios de la sociedad chilena. La composición social del Frente Amplio es pequeñoburguesa por excelencia: abogados/as, periodistas, sociólogos/as, médicos, etc. Gran parte de la generación universitaria que luchó en 2011 ahora ingresa al gobierno: el propio Boric, Camila Vallejos, Giorgio Jackson, Izkia Siches, Javiera Toro, Antonia Orellana y muchos otros en cargos secundarios. La juventud universitaria de 2011 llegó al poder. Esa juventud no es la representante directa de la gran burguesía del país, no son hijos o hijas de grandes burgueses y muchos de ellos/as no vienen de las universidades tradicionales que forman

los representantes de la gran burguesía. Tampoco son representantes de la clase trabajadora y el pueblo pobre.

El Partido Comunista, si bien ha sido históricamente un partido de la clase obrera, con importante peso en sectores populares, hace mucho viene cambiando su composición social. El PC hoy tiene como su principal base social la burocracia sindical acomodada, la intelectualidad universitaria y pequeñoburguesa y los trabajadores del sector público. Cada año que pasa el partido pierde más peso territorial y pasa a tener más peso en la institucionalidad burguesa —concejales, alcaldes, diputados, constituyentes y hasta un senador—. Ese proceso de aburguesamiento del PC tenderá a acelerarse rápidamente a partir del futuro gobierno. Es la primera vez que el Partido Comunista tiene un rol tan protagonista en un gobierno desde la UP, aunque el PC de hoy no tenga nada que ver con el PC de los años 70.

sigue en la
página 11

Con un plantón en la puerta de la fábrica, el Sindicato de Trabajadores de Eximport Industrial celebró su primer aniversario de fundación y recibió saludos de los sindicatos combativos Sitob, Celima, Molitalia.

El sindicato es pequeño pero sus desafíos son grandes. No hay aumentos, o se los entregan de acuerdo a caprichos de la empresa. Los sindicalizados son discriminados hasta en las horas extras. Se han instalado cámaras filmadoras para hostilizar a los trabajadores. No hay pruebas COVID y todos deben llenar una mini hoja declarando su estado de salud y entregarlo a la hora de ingreso

Sindicato Eximpor Industrial cumplió un año de lucha



todos los días, se sientan mal o no.

Para colmo, el pliego de reclamos no tiene solución y

es ninguneado por la empresa desde que fue presentado en abril del año pasado pretextando que “no hay plata”. Aho-

ra que se inició un extraproceso el sindicato espera llegar a una solución satisfactoria, de otro modo tienen el acuerdo de iniciar una huelga indefinida.

La empresa lidera el mercado como comercializadora y productora de equipos para minería y construcción y goza de altas utilidades. Es la única que produce y provee de máquinas Dynamic a EDIPESA, con 30 tiendas en el país, y

cuyo propietario y directivos son los mismos que los de Eximport Industrial.

Los obreros producen sin parar, aún en pandemia, sin recibir ni siquiera un mejor trato, y cuando piden aumentos no se oye padre.

El sindicato se fundó hace un año y en su corta existencia ya aprendió que sin luchas no hay victorias. Es dirigido por el combativo cro. Pablo Sánchez.

Al cumplir un año el grupo de trabajadores reafirmó su disposición de seguir construyendo su unidad para la lucha, por salarios dignos y respeto pleno a sus derechos, y agradeció los saludos que le llegaron.



Los negocios de los ministros y ministras

A pesar de una composición social principalmente pequeñoburguesa, algunos personajes del futuro gabinete llaman la atención por sus negocios.

El futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, ingeniero civil de la Universidad Católica, puede ser considerado un burgués, aunque no sea de los más ricos de Chile. Muñoz tiene acciones en distintas empresas de distintos rubros en un total de más de 700 millones de pesos. Sus negocios van desde el sector de Transportes (Sociedad de Transportes Gama y Sociedad de Arrendamiento de Vehículos Chacabuco —aunque públicamente critique el uso de automóviles y promueva el uso de la bicicleta—) hasta la agricultura y el sector inmobiliario.

La futura ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega Morales, tiene inversiones en 5 empresas, principalmente del ramo inmobiliario.

Otro caso muy interesante es el de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, que posee una sociedad de Inversiones y Asesorías con su marido, Cristian Franz, que fue Superintendente de Medioambiente entre 2014-2018 (gobierno de Bachelet). Franz prestó asesorías a empresas tan “idóneas” y “sustentables” como Agrosuper, minera Collahuasi, Antofagasta Minerals y Barrick, sí, la misma de Pascua Lama. La misma sociedad también emitió boletas de asesoría a nadie menos que Agustín Walker del Río, uno de los magnates de los derechos de aprovechamiento de agua.

El Partido Comunista tampoco queda afuera. El futuro ministro de Ciencia y Tecnología también tiene sus negocios en el sector de la Salud, donde ha ganado dinero en contratos con el Estado y es socio de una clínica privada. La lista sigue, con negocios de Mario Marcel y otros ministros.

¿Y qué cambios podemos esperar?

En primer lugar, debemos destacar que **Boric no prometió cambiar las estructuras del país**. No prometió recuperar la riqueza que se llevan las transnacionales del cobre, no prometió revertir las pri-



valizaciones de los últimos 30 años, no prometió devolver las tierras al pueblo mapuche, no prometió acabar con los grandes monopolios de las farmacias, ni nada de eso. Tampoco prometió liberar a todos los presos políticos. Así que los que creen que este será un gobierno de grandes cambios, ya pueden ir disminuyendo sus expectativas.

Pero sí Boric prometió una serie de cambios. Salud y educación públicas, agua para las comunidades, perdonar el CAE, acabar con las AFP, reformar la policía, etc.

Para empezar a realizar esos cambios, Boric y su Ministro de Hacienda tienen una prioridad: hacer una Reforma Tributaria. La Reforma Tributaria le permitiría recaudar más impuestos para financiar los gastos sociales de su gobierno. Sin embargo, ese plan tiene varios problemas. El primer problema es que no cuestiona el verdadero saqueo que hacen los grandes empresarios de las riquezas producidas por la clase trabajadora. Solo en el caso del cobre, se calcula que entre 12 y 20 mil millones de dólares van a parar todos los años al bolsillo de los accionistas de empresas mineras, la mayoría de ellos, extranjeros. El *royalty* minero que viene caminando en el Congreso y es apoyado por el futuro gobierno variará (si es que se aprueba) entre 1 y 3% de impuesto a las ventas de la gran minería, dependiendo del precio del cobre. Ese *royalty* no cambia en prácticamente nada el saqueo que realizan las grandes transnacionales. Si a eso le sumamos las ganancias de los grandes bancos, empresas forestales, *retail*, etc., llegamos a cifras impresionantes de recursos, dinero que podría ser usado para solucionar todos los problemas del país.

El segundo problema: la lógica del gobierno de financiar derechos sociales con impuestos a los más ricos tiene otro “inconveniente”. Para que haya más dinero en las arcas fiscales, los ricos tienen que hacerse más ricos y pagar más impuestos, sus empresas y sus fortunas deben crecer. Sin embargo, para que crezcan, esas empresas tienen que ampliar su producción, exportar más, tener más ganancias.

Esto tiene dos consecuencias contradictorias con el plan de gobierno:

- 1.- para que el gobierno tenga más dinero las empresas llamadas extractivistas —la base de la economía chilena— (minería, forestales, pesca industrial, etc.) deben producir y exportar más, lo que destruye el medioambiente y las comunidades;
- 2.- para crecer, las empresas deben aumentar la explotación de los trabajadores: invertir en mayores tecnologías para aumentar la productividad (y con eso hacer que menos trabajadores puedan producir más) y aumentar los niveles de explotación que existen hoy. Así, su plan económico va en el sentido opuesto a lo que prometió: cuidar el medioambiente, disminuir la jornada laboral, aumentar los sueldos, etc.

El tercer problema que tiene ese plan es que al permitir que los grandes capitalistas sigan dominando el conjunto de la economía del país, permiten también que esos capitalistas controlen y corrompan a toda la institucionalidad estatal. La primera consecuencia de eso será la dificultad que tendrá Boric para aprobar sus reformas en el Parlamento, institución controlada por el gran empresariado a través de los partidos de derecha y la ex Concertación. Las re-

formas propuestas por el gobierno tendrán que ser negociadas con la gran burguesía y ésta será la que tendrá el sartén por el mango. Además de eso, la gran burguesía sigue controlando los medios de comunicación de masas y está “infiltrada” en todas las instituciones estatales, lo que Boric no propone cambiar al repartir cargos a la ex Concertación.

En resumen, podemos decir que Boric intentará hacer reformas “en la medida de lo posible” y en los términos del gran empresariado, lo que apuntará al fracaso o moderación de varias de esas reformas. Sin dudas habrá choques entre el futuro gobierno y el empresariado, ya que Boric sabe que está sentado sobre un barril de pólvora. Si el movimiento de masas no vuelve a salir a las calles, todo indica que el gobierno terminará adaptándose a los términos de los dueños del país. Si el movimiento de masas se pone nuevamente en acción, la inestabilidad del futuro gobierno será grande.

La cuestión mapuche: una bomba de tiempo

Otro problema central y que no tendrá solución será la cuestión mapuche. Si bien Boric ha señalado que retirará las tropas militares del Wallmapu, el problema permanecerá. La “cuestión mapuche” no tendrá solución si no se les devuelven las tierras y si no respeta su derecho a la autodeterminación. Junto con esas medidas, deben ser liberados todos los presos mapuche, lo que el gobierno tampoco hará.

Aunque Boric intente negociar con empresarios y sectores mapuche para ganar tiempo, el futuro gobierno no tiene un plan para solucionar el problema, pues no quiere

enfrentarse a los dueños de las grandes empresas forestales que ocupan el territorio mapuche.

¿Y la Convención Constitucional?

Otro elemento importante a considerar será el resultado de la Convención Constitucional y el Plebiscito de salida, que podrá aprobar o rechazar la nueva Constitución. Aquí también debemos estar muy alertas a lo que está pasando.

Si no hay movilización popular ahora, la tendencia es que la futura Constitución garantice algunos derechos en el papel, pero que eso no sea cumplido después, ya que no se tocará la estructura del modelo económico.

Todo lo que hemos conquistado hasta ahora ha sido fruto de la movilización y organización popular. La propia Convención Constitucional no existiría sin las enormes movilizaciones populares de los últimos años. Creemos que ese es el camino para conquistar los verdaderos cambios que hoy se están discutiendo.

Por eso, es fundamental que nos organicemos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros territorios, en los sindicatos. Es fundamental que la clase trabajadora acompañe los debates de la Convención Constitucional y presione para que las demandas populares sean respetadas y votadas por esa Convención. Debemos recuperar el camino del 12 de noviembre de 2019, donde una huelga general combinada a las movilizaciones populares obligaron al gobierno de Piñera y a los partidos del régimen a abrir el actual Proceso Constituyente.

Necesitamos construir un partido político de la clase trabajadora que tenga como objetivo recuperar todo lo que los grandes empresarios nos han saqueado —las tierras, el cobre, los mares, etc.— y poner toda la economía al servicio de la población trabajadora y la recuperación de la naturaleza. Si el gobierno de Boric no soluciona los problemas del país, deberá abrir el paso a los que tenemos un proyecto para solucionarlos: el pueblo trabajador y la juventud.

El **Movimiento Internacional de Trabajadores** hoy es una herramienta en el sentido de la construcción de ese partido. Invitamos a todos y a todas a conocer y a organizarse en el MIT.

Ómicron: ¿Oleada final o pandemia eterna?



Actualmente, el mundo sufre una nueva e intensísima oleada de la pandemia de coronavirus provocada por la variante Ómicron, con una dinámica de contagio que ya supera claramente los picos más agudos de las oleadas anteriores.



Por Alejandro Iturbe

Veamos datos de algunos países. En EEUU, entre el 18 y el 19 de enero pasados, se reportaron 1'178,403 casos (contra 75,883 de esa fecha en diciembre), de los cuales hubo 152,427 hospitalizados y 2,990 muertes. En la India, el 19 de enero pasado se registraron 317,532 contagios (contra 22,775 del mes anterior). En Argentina, ese día hubo 128,321 mientras que en diciembre se habían producido 5,648 (¡casi 23 veces más!). La gran mayoría de los países del mundo muestran crecimientos exponenciales de contagios.

A partir de esa realidad, en los medios periodísticos y científicos se desarrolla un debate. Algunos, por una combinación de elementos, afirman que, ahora sí, la pandemia se acerca a su fin o, mejor dicho, va hacia su transformación en "endemia" (una enfermedad crónica de oleadas secuenciales, pero "tolerables" en el impacto que tienen en la vida y en las actividades cotidianas de las personas, como la gripe clásica). Otros, por el contrario, sostienen que ese fin está lejos y que es muy apresurado predecirlo.

Es cierto que los estudios médicos de los casos atendidos indican que la acción de esta cepa en el cuerpo humano es menos agresiva que variantes anteriores, especialmente la Delta, porque permanece en las vías aéreas, tiende a no descender a los pulmones. Sin embargo, este análisis deja de lado lo que se ha denominado "covid largo" o "pos covid". Es decir, las secuelas y efectos negativos que deja la infección en el organismo por un período mucho más prolongado. Algo que, en el caso de esta oleada de Ómicron, solo podrá saberse con certeza en los próximos meses.

Otra omisión muy importante es que este análisis pone la evolución de

la enfermedad en el terreno de las mutaciones del virus y deja de lado el efecto positivo que ha tenido la vacunación. Porque los estudios médicos demuestran que la nueva cepa del virus contagia más a los no vacunados y, al mismo tiempo, que los no vacunados tienden a desarrollar cuadros más graves.

A finales del año pasado, el jefe de la OMS (Organización Mundial de la Salud), Tedros Adhanom Ghebreyesus, compartía este optimismo (aunque poniendo el acento en la vacunación) y emitió una nota de esperanza sobre cómo vencer la pandemia en 2022. Menos de tres semanas después, dejó de lado esta esperanza y declaró que "la pandemia de coronavirus 'está lejos de haber terminado' y descartó que 'la variante Ómicron... sea benigna... está provocando hospitalizaciones y muertes, e incluso los casos menos graves desbordan los centros de salud'. Finalmente alertó que "es probable que surjan nuevas variantes".

Esta dinámica de nuevas cepas ya está presente. Lo que está comprobado es el surgimiento de la Flurona, un contagio doble de covid-19 y el virus de la gripe que fue descubierto en Israel pero que ya comienza a aparecer en otros países y que tendría altas posibilidades de contagio.

La parábola de la "gripecita"

La mayoría del capitalismo imperialista, las burguesías nacionales y sus gobiernos se aferran con fuerza a la "esperanza" de que la pandemia evolucione hacia una endemia y que una de las enfermedades más peligrosas que ha conocido la humanidad retroceda naturalmente al nivel de una gripe. Esto les sirve, por un lado, para justificar la criminal política de "nueva normalidad" al servicio de mantener

sus ganancias y los niveles habituales de explotación de la clase trabajadora. Por el otro, para intentar ocultar su responsabilidad en el surgimiento de la pandemia, en su desarrollo y en su absoluta imposibilidad de combatirla seriamente y derrotarla.

Nosotros no tenemos los elementos para elaborar nuestro propio pronóstico. En ese sentido, debemos apelar a los estudios y consideraciones de los científicos especialistas para formarnos una opinión. Pero sí tenemos el derecho, por un lado, de desconfiar profundamente de este nuevo anuncio del "fin de la pandemia". Por otro lado, acusamos al capitalismo de ser el responsable de su surgimiento, su desarrollo y su impacto, y su persistencia.

Es responsable porque ha creado condiciones cada vez más propicias para el surgimiento de *zoonosis* (enfermedades que se transmiten desde los animales al ser humano) que se propagan con rapidez por la gran dinámica actual de circulación de personas y mercaderías. Porque los gobiernos burgueses encararon el combate contra ella con sistemas de salud pública debilitados por años de ataques, con el criterio de alentar los negocios privados en esta área, y sin hacer las inversiones públicas necesarias para revertir este deterioro. Porque, ante la recesión de la primera mitad de 2020, sin haber derrotado la pandemia, comenzó la criminal política de la "nueva normalidad" que multiplicó las posibilidades de contagio.

Sobre la vacunación

A inicios de 2021, se anunció el "año de la vacunación" y, con ello, del triunfo sobre la pandemia. Pero ese gran avance que representaban las vacunas también fue manejado con los

criterios del capitalismo imperialista. La "carrera por la vacuna", se hizo sin un plan de desarrollo cooperativo y centralizado internacionalmente sino en una feroz competencia entre esos grandes laboratorios privados y salvaguardando sus ganancias a través del "derecho de patente". Las vacunas tuvieron un alto precio y los países imperialistas compraron y acapararon gigantescas cantidades de dosis de vacunas para su población mientras, en el otro extremo, los países más pobres solo accedían de modo limitado o no tenían ninguna posibilidad de comprarlas y, todavía hoy, presentan porcentajes menores o bajísimos de vacunación.

Esta contradicción se expresó agudamente en la India, que por un lado es el principal fabricante de vacunas del mundo (en laboratorios de propiedad de los conglomerados imperialistas) y, por el otro, no tenía condiciones de comprarlas masivamente para su población. En este país se desarrolló una fortísima segunda oleada de la pandemia que originó la peligrosísima variante Delta, que acabó volviendo como un *boomerang* sobre los países imperialistas y el resto del mundo.

La profunda desigualdad en los niveles de vacunación, sumada a la criminal política de la "nueva normalidad", es la causa profunda de la persistencia de la pandemia, del surgimiento y la propagación de nuevas cepas del virus, e incluso de una acción parcial de las vacunas ya aplicadas. Hasta el jefe de la OMS "denunció de nuevo la falta de equidad en materia de vacunas" y dijo que... "cerca de la mitad de la población mundial aún no está vacunada".

(Entra y lee el artículo completo en: www.litci.org)



Partido Socialista de los Trabajadores – PST
Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

